



**PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO FEDERAL Y AL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS A UNIFICAR ESFUERZOS Y COORDINAR ACCIONES PARA CONTENER LOS EFECTOS DE LA VIOLENCIA E INSEGURIDAD EN LA ENTIDAD, A TRAVÉS DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD INTEGRAL, QUE INCLUYA MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA, CON EL FIN DE PROTEGER LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS Y SERVIDORES PÚBLICOS EN CHIAPAS.**

Quienes suscriben, **senadores Manuel Añorve Baños, Mario Zamora Gastélum, Ángel García Yáñez, Claudia Edith Anaya Mota y senadoras y senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional**, en la LXV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente **Proposición con Punto de Acuerdo**, al tenor de las siguientes:

### **CONSIDERACIONES**

Durante los últimos tres años, Chiapas se visto envuelto en un importante número de sucesos violentos que afectan gravemente a los habitantes de la entidad. La semana pasada, el estado de Chiapas fue sacudido nuevamente por un acto de violencia que puso en evidencia la necesidad urgente de abordar los problemas de seguridad en la región.

El martes 27 de junio, un grupo armado llevó a cabo un secuestro masivo en Ocozocoautla, Chiapas. Se informó que el grupo armado viajaba en tres



camionetas y estaba compuesto por hombres encapuchados que interceptaron un autobús, en el que viajaban 16 trabajadores administrativos y policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Aunque había más personas en el autobús, los secuestradores liberaron a las mujeres y únicamente forzaron a los hombres trabajadores a descender del autobús alrededor del kilómetro 130 de la carretera Tuxtla-Ocozocoautla. El autobús había salido del Cuartel General ubicado en las cercanías del Aeropuerto Llano San Juan.

En respuesta al secuestro, corporaciones policiales de los tres órdenes de Gobierno llegaron al lugar y comenzaron un operativo de rescate para localizar y liberar a los policías secuestrados. Este incidente ha causado gran alarma y preocupación entre los ciudadanos de Chiapas y pone de relieve la importancia de garantizar la seguridad de los servidores públicos y la comunidad en general.

Afortunadamente, el viernes 30 de junio los 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSYPC) de Chiapas fueron liberados luego de permanecer tres días secuestrados. Los trabajadores fueron hallados con vida y deshidratados cuando caminaban sobre una carretera.

Julio César Rincón, director de Comunicación Social del Gobierno de Chiapas, informó que no se tiene información sobre que haya existido alguna negociación entre el gobierno y los secuestradores y declaró que se llevarán a cabo las investigaciones correspondientes. Se presume que los secuestradores pretendían chantajear a tres funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSYPC) para que hablaran con Jesús Esteban Machado Meza, alias “El Güerito Pulseras”, jefe de plaza del Cártel de Sinaloa en Chiapas y liberaran a la cantante Nayeli Cyrene Cinco Martínez que fue secuestrada el pasado 22 de junio en Tuxtla Gutiérrez, sin embargo, la información no ha sido confirmada por las autoridades oficiales.



Este secuestro de civiles, empleados del Gobierno de Chiapas, constituye un hecho sin precedentes y uno de los desafíos más agresivos al que ha tenido que enfrentarse el Estado mexicano. Es una clara muestra de que, en Chiapas, el gobierno está completamente rebasado y que el crimen organizado puede actuar impunemente en todos los espacios de esa Entidad.

La realidad es que la estrategia de seguridad pública que se ha implementado en nuestro país durante los últimos cinco años está siendo rebasada en todos los frentes, se han perdido los límites entre la autoridad y los delincuentes, situación que amenaza cada vez más a toda la población civil. Urge que el Estado Mexicano haga uso de todos los recursos a su alcance para poner un alto a esta ola de violencia que se recrudece cada día que pasa.

Imposible olvidar que, por sus más de 1,000 kilómetros de frontera con Guatemala, Chiapas es históricamente un estado complejo y sujeto a diversas redes de tráfico que van desde autopartes, automóviles y mercancías hasta tráfico de personas, animales exóticos o sustancias nocivas para la salud.

Tampoco podemos dejar de lado que existe un gran número de comunidades y pueblos originarios que radican en la entidad y la pluriculturalidad que caracteriza a Chiapas. Sin embargo, en los últimos meses un gran número de ciudadanas y ciudadanos, fundamentalmente de comunidades originarias, se visto en la necesidad de abandonar sus comunidades y forzar su desplazamiento.

El hecho anterior se suma a los ocurridos recientemente el pasado 25 y 25 de mayo, cuando en comunidades de los municipios de Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Trinitaria y Amatenango de la Frontera, la población fue víctima de agresiones como enfrentamientos armados, secuestros, el reclutamiento forzado de hombres, así como la muerte a quienes opusieron resistencia.



Tras los hechos violentos que se vivieron la semana pasada, Guadalupe Moguel Gómez, presidenta de hoteleros de San Cristóbal de Las Casas, en entrevista telefónica dijo que es lamentable lo que está pasando en el estado de Chiapas y que esto ahuyenta el turismo, pidió al Gobierno Federal y Estatal, en nombre de los empresarios de San Cristóbal aplicar el estado de derecho porque los chiapanecos merecen caminar libremente en las carreteras, en las calles, así como sus visitantes.

Ante estos hechos, diferentes organizaciones civiles han exigido al gobierno y a sus autoridades, intervenir de manera urgente para frenar la violencia del crimen organizado en municipios de la frontera sur de Chiapas.

Recientemente, a través de un comunicado la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) denunció el recrudecimiento de la violencia debido a conflictos por el control territorial.

No podemos permitir que estas imágenes de secuestros masivos de personas, se hagan parte del día a día de las y los mexicanos, o que los gobiernos actúen únicamente en casos que cobren relevancia nacional.

Por ello, creemos importante que el Gobierno Federal coadyuve con el Gobierno del Estado para mitigar y contener los efectos de la violencia y la inseguridad que azotan a varios municipios de la entidad. Es importante la participación y colaboración de más efectivos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal para llevar a cabo tareas, estrategias y medidas de prevención para salvaguardar la integridad de las familias y proteger a toda la ciudadanía.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de esta Asamblea, el siguiente:



## **PUNTO DE ACUERDO**

**UNICO.** La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno Federal y al Gobierno del Estado de Chiapas a unificar esfuerzos y coordinar acciones contener los efectos de la violencia e inseguridad en la entidad, a través del diseño e implementación de una estrategia de seguridad integral, que incluya medidas de prevención, protección y respuesta ante situaciones de emergencia, con el fin de proteger la integridad y seguridad de los ciudadanos y servidores públicos en Chiapas.

## **SUSCRIBEN**

**Sen. Manuel Añorve Baños**

**Sen. Mario Zamora Gastélum**

**Sen. Ángel García Yáñez**

**Sen. Claudia Edith Anaya Mota**